

**LA CONFLICTIVA LOCALIZACIÓN INTRAURBANA
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES.
El caso del Puente de Vallecas (Madrid)**

POR

ANTONIO MORENO JIMÉNEZ, CARMEN HERRAIZ DE LA TORRE
Y
PILAR JARQUE SANGÜESA

Introducción

Las dotaciones para la población destinadas a satisfacer unas necesidades o demandas requieren una cierta proximidad a la «clientela». Sin embargo, los efectos derivados de un determinado servicio o instalación pública no se agotan en los beneficios conseguidos por los usuarios al poder acceder fácilmente a ellos. Muchas actividades humanas poseen unas repercusiones (buenas o malas) sobre su entorno, al margen de que se usen o no. Estos impactos territoriales para ciertas actividades han provocado, desde hace varias centurias incluso, una reglamentación acerca de los

Antonio Moreno Jiménez, Carmen Herraiz de la Torre y Pilar Jarque Sangüesa.
Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid.

* Este trabajo forma parte de un informe más amplio para el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda), elaborado en equipo bajo la dirección de Antonio Moreno.

Estudios Geográficos
Tomo LIII, n.º 209, octubre-diciembre 1992

requisitos que han de cumplir los establecimientos y los emplazamientos potenciales. Baste recordar, por ejemplo, lo que concierne a actividades molestas, insalubres o peligrosas. Los equipamientos públicos ocasionan, al igual que muchas actividades industriales, unos efectos de ese carácter cuya valoración debe realizarse como parte integrante del análisis y formulación de políticas (Patton y Sawicki, 1982; Quade, 1975; Subirats, 1989), evaluación de impactos sociales (Finsterbuch y Wolf, 1981; Finsterbuch, 1985), planeamiento urbano (Leal y Ríos, 1989), diseño y gestión de la prestación de servicios (Sauber, 1983) e, incluso, para los de titularidad pública, en los estudios sobre repercusión social de gastos e inversiones públicas (Lineberry, 1977; Bennet, 1980; Pinch, 1985; Meyer, 1986). En síntesis, amén del interés científico, los resultados de una indagación sobre este terreno poseen una virtualidad innegable de cara a la práctica de la toma de decisiones.

En el presente artículo se aborda tal cuestión comenzando por unas breves referencias teóricas para enmarcar el proceso de análisis empírico ulterior. Tras presentar el caso de estudio y la metodología adoptada se comentan los hallazgos más destacados.

Las externalidades espaciales: conceptos básicos

En la bibliografía económica sobre los efectos indirectos asociados al proceso productivo se ha acuñado el concepto de externalidad (cf. Lin, 1976; Mishan, 1976; Cornes y Sandler, 1986; Johansson, 1987). En su acepción más escueta se la entiende como cualquier beneficio o coste sobre terceros que se deriva de la actuación de un agente y que no es pagado o cobrado. En realidad resulta más exacto aludir a cambios en la utilidad/desutilidad o satisfacción/insatisfacción para incorporar también aspectos no monetarios o fácilmente cuantificables (por ejemplo, costes psicológicos). La ausencia de una transacción monetaria inmediata que refleje tal cambio conduce a la conclusión de que se da un fallo o inexistencia del mercado, entendiéndose que en un mercado perfecto serían eliminadas, al quedar internalizadas en la función de producción, es decir, en los precios de los bienes y servicios.

Sin embargo, como acertadamente subrayó Harvey (1977, 54 y ss.), el concepto de externalidad es intrínsecamente territorial y de ahí que se la asimile a menudo a «derrama» o «efecto de vecindad». El mismo autor

perfiló las facetas geográficas de la cuestión cuando, al socaire de su análisis sobre la estructura urbana, abordó el papel de los efectos externos (ausentes del mecanismo del mercado), como condicionante olvidado hasta entonces. Apoyándose en la conocida teoría de los bienes públicos puros (cf. Pinch, 1985, p. 7 y ss.), apuntó a la localización como una de las fuentes más destacadas de «impureza»: «Todos los bienes públicos localizados son «impuros» y la exterioridad existe como un “campo espacial” de efectos. Podríamos generalizar estos campos espaciales por funciones de decrecimiento en el espacio o por ecuaciones de difusión (como las que nos muestra el campo general de los costos exteriores impuestos por una fuente de polución atmosférica). Estos campos espaciales de efectos exteriores varían en intensidad y extensión... Los campos de efectos exteriores pueden ser positivos o negativos o, algunas veces... las dos cosas a la vez...» (Harvey, 1977, p. 57).

Y añadía acerca de su relevancia: «No podemos tener ninguna duda sobre el hecho de que su localización conlleva efectos muy importantes sobre el ingreso real de los individuos. Es posible que los cambios que puedan producirse en ellos sean un factor de redistribución en el ingreso y, por ello, una fuente potencial de desigualdad en el ingreso.» (Ib.).

Smith (1980, p. 156 y ss.), Kanemoto (1980) y Papageorgiou (1978 y 1982) han formalizado ulteriormente las ideas fundamentales de campo de externalidades, sobre todo en medio urbano. Entre las variables centrales en su definición emergen, por ejemplo, las de distancia respecto a la fuente emisora de efectos, carácter (fijo o móvil) de dicha fuente, densidad de individuos afectados, dirección de propagación, etc.

En la bibliografía se cuenta ya con un cierto volumen de aportaciones sobre las externalidades espaciales, lo que permite esbozar las principales direcciones de investigación adoptadas:

A) Las externalidades pueden contemplarse como un indicador, como una faceta de los conflictos espaciales los cuales habrían de ser objeto de estudio en su naturaleza y dinámica (Cox, 1973; Cox y Johnston, 1982). Al respecto varios sugestivos estudios se han llevado a cabo sobre la conflictividad urbana (Janelle y Millward, 1976; Dear y Long, 1978), utilizando como fuente de información las noticias de prensa: el carácter del problema (transporte, ocio-recreo, comercio, escuelas, etc.), su ubicación y variación espacial (gradientes), intensidad y tipo de acciones (re-

clamaciones administrativas, manifestaciones, arrestos, etc.), frecuencia, asociación territorial entre sí y con otros rasgos del medio urbano (status social de los residentes, edad del barrio, actividades dominantes, etc.), agentes participantes (ya como provocadores, oponentes o defensores), facetas o bases para la implicación de ellos (económicas, sociales, estéticas, etc.) han sido ítems de análisis de particular valor para el diagnóstico.

B) Identificación de tipos de efectos, actitudes vecinales, campos de influencia, etc. Un buen ejemplo lo constituye la amplia investigación llevada a cabo sobre las reacciones ante la localización de los hospitales psiquiátricos en Toronto (Dear, Taylor y Hall, 1980; Dear y Taylor, 1982).

C) Proposición y validación de métodos para determinar campos de utilidades o niveles de bienestar/malestar espaciales provocados por externalidades. La bibliografía sobre medición de utilidades y preferencias es amplia en los campos de la Economía, Psicología y Sociología. En Geografía, Pacione (1982) ha discutido la relevancia tanto de los indicadores subjetivos como objetivos y Bale (1981) ha propuesto métodos de interpolación espacial sobre datos de encuestas para precisar la intensidad y forma de los campos de externalidades.

D) Modelización del comportamiento espacial (en la elección de vivienda, por ejemplo) incorporando los efectos externos en formulaciones de tipo gravitatorio. Werczberger y Berechman (1988) han seguido esta perspectiva de cara a encontrar claves explicativas de la localización residencial intraurbana.

E) Selección de localizaciones basadas en modelos de optimización. Se trata de resolver problemas en los que los objetivos suelen girar en torno a la minimización de los efectos negativos sobre el entorno, supuesto que se dispone de una función que representa de forma realista las preferencias, desutilidades, riesgos, etc., de la población hacia la instalación (cf., por ejemplo, Orloff, 1977; Church y Bell, 1981; Ratick y White, 1988; Erkut y Neuman, 1989).

F) Configuración de modelos teóricos o estrategias de los poderes públicos para plantear las decisiones de localización de equipamientos controvertidos (Mumphrey, Seley y Wolpert, 1971; Reynolds y Honey, 1978) o avistar esquemas de compensación por los perjuicios ocasionados (Miller, 1987).

Planteamiento del análisis de un equipamiento generador de externalidades

A la luz de los estudios reportados en la bibliografía se ha podido ya establecer un cierto número de hallazgos y generalidades sobre las externalidades espaciales, cuya exposición se ha realizado en otro lugar (cf. Moreno y Escolano, 1992, pp. 215-219). Sin embargo, a pesar de los datos aportados por las diferentes investigaciones, todavía se cuenta con una información parca y poco sistematizada. Dada la variedad de equipamientos y sus diversas formas de relacionarse con las actividades e individuos del entorno, se precisan unas bases más sólidas para sustentar unas decisiones públicas que tengan en cuenta esos efectos externos. Y esa reclamación no es retórica: el problematismo que generan algunos de tales equipamientos (prisiones, por ejemplo) se traduce a menudo en serios conflictos socio-políticos, modificaciones imprevistas en los planes, costosas compensaciones a los afectados e incluso abandonos y fracasos de los proyectos que, por una gestión desinformada y de escaso realismo, ocasionan gastos ineficientes o despilfarros.

En este texto se pretende llevar a cabo una aproximación, a escala micro-geográfica, al conocimiento de las ventajas y desventajas derivadas de la vecindad de un cierto tipo de equipamientos: los centros de atención a drogodependientes (CAD). Conviene advertir que, por razones de recursos, no ha sido posible afrontar la evaluación de la totalidad de los beneficios y perjuicios generados y que, particularmente, se ha excluido y pospuesto por ahora la importantísima utilidad que se deriva desde la óptica de los usuarios. La cara a abordar estriba en la percepción o valoración que el vecindario hace de esos equipamientos públicos. La meta consiste en, a partir de las percepciones de la población residente, clarificar algunas de las externalidades (positivas o negativas) que se generan sobre el entorno y que provocan abundantes debates y conflictos. Pese a la extendida opinión de la conveniencia social de los CAD u otros equipamientos análogos, su proximidad produce reacciones de aversión/aprecio que, en definitiva, no son sino un afloramiento o síntoma de las funciones de utilidad individuales. Bienestar social e individual parecen, a veces, contradecirse cuando se examina la ubicación de ciertos equipamientos. En el apartado siguiente se presenta el caso de estudio, su actualidad y relevancia.

*Los centros de atención a drogodependientes en Madrid:
necesidad y conflictividad socio-espacial*

La extensión del consumo de drogas ilegales, que parecen poseer un fuerte mercado potencial (Alvira y Comas, 1989), los problemas en materia de salud (mayor riesgo de difusión de ciertas enfermedades como el SIDA), seguridad (delitos contra la propiedad o la integridad personal), desorganización social, etc., y la inadaptación del sistema de sanidad para el tratamiento de este tipo de patología social ha ido propiciando la emersión de una serie de nuevas organizaciones o establecimientos de servicios, tanto por parte del sector privado como por parte de la administración pública.

Una de la fórmulas adoptadas por las comunidades autónomas y los municipios ha radicado en los llamados Centros de Atención a Drogodependientes. En ellos, equipos de psicólogos, asistentes sociales, médicos, ATS, etc., atienden tareas de prevención, asistencia y reinserción en régimen externo. En Madrid, el Ayuntamiento (Concejalía de Asuntos Sociales) comenzó su implantación en diciembre de 1988 y contaba en enero de 1991 con siete; la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Integración Social, ha abierto otros en la capital y en ciertos núcleos de la provincia. La articulación de tales iniciativas toma la forma, habitualmente, de planes específicos (municipales o regionales) sobre drogas.

Una de las cuestiones más exasperantes que los responsables políticos y administrativos de dichos planes están afrontando es la paradoja de que, pese a la indiscutible necesidad social de tales servicios públicos, la ubicación de las instalaciones concretas genera una fuerte oposición y conflicto con los ciudadanos: manifestaciones, pintadas, noticias en la prensa, procesos judiciales, etc., han menudeado al respecto. La opinión mayoritaria de los madrileños encuestados en el estudio de Alvira y Comas (1989, p. 188 y ss.) se decanta por considerar a los CAD como focos de problemas (tráfico de drogas y delincuencia).

La cuestión no es baladí por cuanto dicha oposición ha tenido consecuencias negativas en varios aspectos que conciernen a las inversiones públicas: retraso en la apertura de esos equipamientos ante la imposibilidad de encontrar locales aceptados por los vecinos, infrautilización de instalaciones acondicionadas para tales menesteres por sentencias judiciales que han denegado su apertura (caso de uno previsto en el madrileño

distrito de Chamartín), e incluso sentencias que ordenan el cierre de otros en funcionamiento (caso, precisamente, del CAD aquí estudiado, sito en el distrito madrileño de Puente de Vallecas).

El problema es un buen ejemplo de esa doble cara que poseen algunos equipamientos: desde el lado de la colectividad como conjunto, las ventajas y beneficios de su puesta en funcionamiento no ofrecen lugar a dudas; desde el punto de vista, sin embargo, de bastantes vecinos (residentes, comerciantes, etc.) próximos a los CAD, se genera una gama de inconvenientes o perjuicios importantes. Interés social e interés individual se concilian mal en casos como el presente.

El CAD elegido como caso representativo para su análisis aquí se halla situado en la calle Puerto Monasterio, 1, perteneciente al madrileño distrito del Puente de Vallecas (figura 1). Sito en unos locales municipales se inserta en una zona que surgió como suburbio de capas populares, hoy con un grado de envejecimiento notable y cierto deterioro en los inmuebles. La existencia del CAD desde 1988 ha sido objeto de controversia vecinal por cuanto han cristalizado grupos organizados, tanto a favor como en contra, argumentando razones de diversa índole.

Consideraciones metodológicas

Ante el objetivo, enunciado más arriba, de identificar exclusivamente los efectos sobre la utilidad de los vecinos al CAD, se han debido adoptar una serie de decisiones metodológicas que conviene explicitar. Es evidente que la medición de externalidades puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Aquí se adoptó una de ellas, calificable de subjetiva-individualista, lo que no implica negar la potencialidad y complementariedad de otras. Su esencia radica en aproximarse a las variaciones de utilidad o bienestar a través de la indagación directa a los individuos. Una encuesta (entrevista) pareció el instrumento de toma de datos más idóneo. En el cuestionario se plantearon una serie de preguntas que respondían a las siguientes metas:

- Identificar los tipos de efectos y su magnitud.
- Averiguar el grado de conocimiento del CAD.

— Determinar actitudes hacia los drogodependientes, el CAD y su emplazamiento.

— Establecer factores explicativos de las valoraciones expresadas (rasgos personales, familiaridad con los problemas de drogodependencia, localización de la vivienda respecto al CAD, etc.).

Como área de trabajo, en la que los efectos pueden ser más sentidos, pareció razonable centrarse en aquélla que se encuentra en los alrededores del CAD; para ello se incluyó toda la comprendida en un radio de 300 m. en torno a él, considerando siempre manzanas completas (por exceso). Los recursos disponibles y la pluralidad de posicionamientos que en la población de la zona existen, aconsejaron reducir el universo en aras de conseguir datos significativos, aunque sólo representasen a una fracción de los residentes. Al respecto, se eligió, por su significado social, al conjunto de cabezas de familia.

El tamaño de la muestra fue establecido a partir de una estimación, basada en el Padrón Municipal de Habitantes, del número de núcleos familiares existentes en dicha zona. Habida cuenta de los recursos disponibles se asumió un volumen de encuestados de 190 aproximadamente. Ello suponía una fracción muestral de 1 por cada 20 núcleos familiares. Las personas objeto de la entrevista fueron seleccionadas mediante muestreo sistemático, identificándose en las viviendas. El miembro de la unidad familiar a quien iba dirigida la encuesta era el cabeza de familia (hombre o mujer indistintamente) o, en su defecto, al que asumía la responsabilidad de la vivienda.¹ Los cuestionarios válidos definitivos fueron 181, si bien en algunas cuestiones aparecen eventualmente no respuestas.²

Las desutilidades del CAD a través de las opiniones y actitudes del vecindario

Una forma clásica y necesaria de evaluar impactos sociales radica en cuantificar el volumen de afectados, positiva o negativamente. Las cifras absolutas y relativas y su traducción visual en gráficos, posibilitan una

¹ El trabajo de campo, tras las pruebas piloto previas, transcurrió entre los días 8 de diciembre de 1990 y 5 de enero de 1991. Las horas y días de ejecución se establecieron de tal suerte que la presencia de ambos cónyuges (cabezas de familia) fuese equiprobable.

² Dada la cifra de encuestas y asumiendo una población infinita, el error máximo esperable, cuando el porcentaje es de 50, asciende a 7'28 puntos.

A. MORENO, C. HERRAIZ y P. JARQUE



Figura 1. — Emplazamiento del Centro de Atención a Dependientes (Circular) y áreas de interés en el municipio de Valladolid.

apreciación para los decisores de ciertos resultados o *outputs*. En los apartados que siguen se procederá en consecuencia a presentar de forma sintética los datos globales más relevantes alcanzados en la encuesta, así como a apuntar algunos correlatos. Tal información, además de resultar valiosa en sí misma, constituye una base necesaria para los epígrafes posteriores en los que se integrarán explícitamente variables de carácter geográfico.

Grado de conocimiento del CAD.—Una de las cuestiones destacadas, y que se toma como punto de partida en la encuesta, es el grado de conocimiento que tiene la población de la existencia del Centro. De los datos obtenidos se deduce que gran parte de la población, el 73 por ciento, conoce la ubicación del centro en la calle Puerto Monasterio, 1; sin embargo, de este grupo sólo un 4'5 por ciento están bien informados de las actividades que allí se desarrollan, mientras que el 57'6 no tienen información alguna de ellas. Esto supone que una cualificada mayoría manifiesta actitudes al respecto desde un gran desconocimiento del tema.

Desglosando a la población en función de rasgos personales tales como sexo, edad, nivel cultural, etc., se observa un mayor grado de conocimiento de la existencia del Centro por parte de los varones (80'2 por ciento) frente al 66'7 por ciento de las mujeres; y a su vez son también los que mejor informados están sobre los servicios de rehabilitación que ofrece. El grado de conocimiento del Centro guarda así mismo una cierta relación con la edad, en el sentido de que el desconocimiento aumenta con ella (gamma igual a 0.21): los conocedores abundan más en casi todas las edades, pero entre los ancianos de más de 70 años la ignorancia está más extendida que entre los restantes grupos. Finalmente un nexo estadístico muy rotundo se revela también con el nivel de introducción: el aumento en el conocimiento del CAD con el grado de estudios resulta inequívoco ($J_i^2 = 21.93$, significativo al nivel de 99.9 por ciento).

Los efectos externos del CAD percibidos por la población.—Los posibles impactos de una actividad pueden ser de índole muy diversa. En nuestro análisis se ha considerado explícitamente una serie de ellos coherentes con unas hipótesis previamente establecidas. Podrían agruparse en varios temas, según que el plano de incidencia sea económico, social, demográfico o psicológico (perceptual).

A) *Efectos económicos.*—Las externalidades de cualquier instalación

pueden tener una repercusión económica sobre usos del suelo o actividades de su entorno. En algunos casos el beneficio o perjuicio es tan tangible (por ejemplo, un foco emisor de polución o de ruido) que el nexo causal resulta bastante simple. En otros, particularmente cuando se trata de efectos más «etéreos» y que, por tanto, están mediatizados por el mecanismo psicológico individual (entiéndase percepciones, impresiones, recuerdos, informaciones más o menos precisas, sentimientos a veces irracionales, etc.), dicho nexo puede resultar más sutil, pero no deja de ser real. Suele tomar la forma entonces de cambios en la «imagen» de una zona, de estereotipos acerca de la calidad, seguridad, belleza, etc., de un lugar. El resultado final de ello puede ser perfectamente una revalorización o, por el contrario, una depreciación de tal lugar ante los ojos de los agentes económicos.

Con tal premisa en mente se ha intentado averiguar si ante implantación del CAD podrían derivarse algunos de tales impactos económicos. Concretamente se han examinado dos de ellos: los valores económicos de los inmuebles situados en las cercanías del CAD y la clientela de los establecimientos de negocio (comercio, otros servicios, etc.).

Sobre estas cuestiones, la encuesta arroja los siguientes datos: más del 50 por ciento de la población considera que la ubicación del CAD no afecta en absoluto a los precios de los inmuebles ni a la clientela de los negocios,³ mientras que un 16 por ciento piensa que el valor de los inmuebles ha disminuido y un 13'3 por ciento que también la clientela de los negocios de la zona ha sido perjudicada. Es mínima la fracción de población que considera que ha sido un factor incidente en la subida de los precios experimentada por los inmuebles.

B) *Efectos sociales*.—Otros presumibles impactos pueden ser calificables de sociales y en concreto se han considerado para su valoración temas tales como delincuencia o seguridad.

Un 36 por ciento de los encuestados cree que, tras la instalación del CAD, se ha producido un aumento de la delincuencia en el barrio, y un 34'4 por ciento manifiesta que la zona es más frecuentada por gente «indeseable». Resulta bastante problemático contrastar tales apreciaciones con

³ Debe tenerse en cuenta el hecho de que esta apreciación no está extraída de los detentadores de negocios, sino de los usuarios de ellos.

datos empíricos, pero de lo que no cabe duda es que, en tanto que creencias, condicionan los comportamientos de quienes las suscriben. En cualquier caso debe advertirse que el 21'2 por ciento de la población entrevistada ha sufrido algún incidente con drogodependientes (de éstos el 94'6 por ciento ha consistido en atraco con arma blanca). Esto ayuda a entender que en la actualidad un 22'2 por ciento de la muestra asocie la presencia del CAD con una disminución de la seguridad ciudadana.

Pese a ello, como se observa en la figura 2, lo más relevante es que la mayor parte de la población (47'2 por ciento) piensa que no ha causado ningún efecto en lo que a la seguridad ciudadana se refiere; otro 40'9 por ciento afirma que no ha supuesto ningún tipo de atracción de grupos indeseables y, finalmente, un 49'7 por ciento manifiesta que no ha afectado a los niveles de delincuencia.

C) *Efectos psicológicos y demográficos.*—Un indicador de la percepción que la población tiene de su barrio se obtiene a partir del concepto que expresan sobre la calidad del barrio y su satisfacción con él. Tal cuestión ha sido planteada a los residentes en la encuesta. Las respuestas obtenidas indican al respecto que el efecto más relevante y de carácter negativo de entre todos los investigados en la encuesta es la satisfacción de los vecinos con su barrio desde que se instaló el CAD. Aquí se alcanza el índice más alto de los perjudicados: los que expresan una disminución de su satisfacción ascienden a un 39'8 por ciento. Por contra, sólo un 21'5 por ciento piensan que el Centro le ha restado calidad; en este terreno, y pese a su presumible vínculo con el aspecto anterior, son más los que creen que no le ha afectado (58 por ciento).

La satisfacción/insatisfacción posee un correlato innegable con la edad: el coeficiente J_i^2 (42.20) es significativo al nivel de confianza del 99.4 por ciento (cuadro 1). En general son las personas entre 50 y 70 años las que, proporcionalmente, más suscriben esa insatisfacción por su barrio, en tanto que en los grupos de 20-40 ocurre lo contrario. Por otra parte, y en lo que concierne a nivel cultural, las de nivel primario o con estudios medios son las que más apoyan esa idea (J_i^2 de 30.78 significativo al nivel del 95 por ciento).

Dados los hallazgos de las investigaciones acerca de la movilidad residencial intraurbana, que involucran a un buen número de condicionantes como los anteriormente abordados, se testó la hipótesis de en qué medida

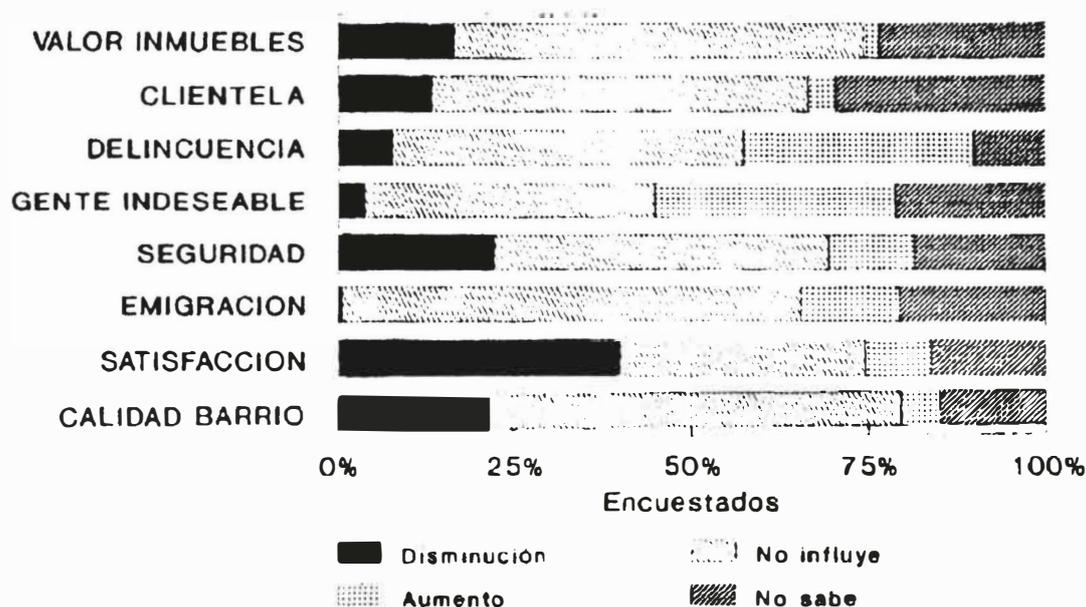


FIGURA 2.—Apreciación vecinal de los posibles efectos del CAD en el barrio

CUADRO I
RELACIÓN ENTRE EDAD Y SATISFACCIÓN CON EL BARRIO

SATISFACCIÓN CON EL BARRIO TRAS APERTURA DEL CAD				
EDAD	Disminuye	No afecta	Aumenta	No sabe
<=20	1.4	3.3	0.0	0.0
20-30	19.4	21.3	23.5	17.9
30-40	23.6	18.0	29.4	10.7
40-50	9.7	19.7	0.0	3.6
50-60	19.4	8.2	17.6	21.4
60-70	23.6	21.3	11.8	10.7
70-80	1.4	3.3	17.6	25.0
80-91	1.4	4.9	0.0	10.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: *Elaboración propia.*

la presencia del CAD podría constituir un acicate para el abandono del barrio por alguna fracción de sus moradores. Evidentemente, un cambio de residencia suele suponer un esfuerzo y coste considerable para la población y no es probable que por un cambio de la envergadura de la instalación de un CAD se genere tal proceso. No extraña así que casi las dos terceras partes (65 por ciento) opine que no condiciona el cambio de residencia; en importancia le siguen los que no saben y sólo un 13.9 por ciento creen que estimula la emigración.

La localización del CAD a examen: los datos de una controversia

Desde la perspectiva del decisor y gestor público, el dónde ubicar un nuevo CAD resulta una cuestión crucial que, desde el análisis geográfico, puede ayudarse a dilucidar. En los apartados siguientes se examinan algunos de los hechos más destacables en el caso bajo estudio: la valoración del actual emplazamiento, las preferencias del vecindario, así como algunas relaciones clarificadoras de las actitudes manifestadas.

Las preferencias vecinales sobre el emplazamiento del CAD.—El período de dos años de actividad del CAD en Vallecas puede considerarse suficiente para evaluar si su ubicación resulta satisfactoria o no, en qué grado responde a una necesidad del barrio o la idoneidad del emplazamiento actual siempre desde el punto de vista de la población investigada.

Al respecto parece que en el momento de la encuesta se mantenían las actitudes que quedaron plasmadas en las fechas de su apertura cuando el Centro desató la polémica entre los distintos agentes sociales, ya que los datos obtenidos señalan que el 41'4 por ciento lo consideran algo o totalmente indeseable, frente a la deseabilidad manifestada por un 24'3 por ciento (figura 3). Ahora bien, al margen de tal repelencia, ¿puede afirmarse que los vecinos sientan que esa dotación es necesaria o que, por el contrario, además de indeseable es superflua en su barrio? Paradójicamente la respuesta es aquí igualmente palmaria: un 69'1 por ciento de los encuestados opinan que el CAD responde a una necesidad del barrio. Esta demanda está justificada por el índice de toxicómanos que alberga el distrito de Vallecas, de lo que parece existir una clara conciencia colectiva. El corolario es muy expresivo: «El servicio es preciso pero, en gran medida, nos disgusta aquí.»

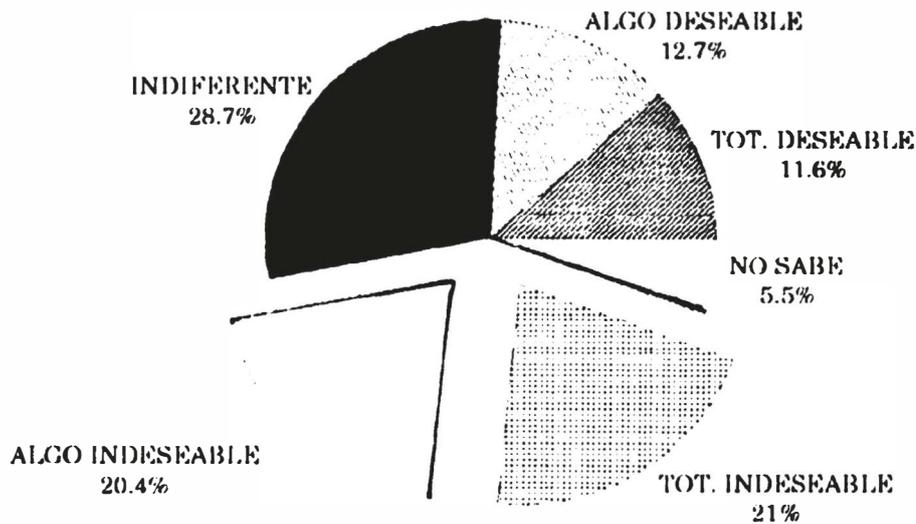


FIGURA 3.—Distribución de las opiniones respecto al actual emplazamiento del CAD

Ante tal tesitura la indagación se ha orientado hacia la identificación de posibles zonas de emplazamiento para tales instalaciones. Veamos cuáles son al respecto las actitudes vecinales. De entrada lo que una mayoría tiene bastante claro es que el toxicómano debe ser tratado en las propias zonas donde vive habitualmente, para facilitar su integración social (63 por ciento de los encuestados). Claves de tal posicionamiento pueden hallarse en las propias explicaciones dadas por algunos drogodependientes: «No siempre sirve mantenerte aislado durante un año en una granja, porque lo peor es la vuelta a tu barrio. Vuelve el peligro porque te has curado en un ambiente artificial» («El País», 4 de mayo de 1989, p. 25). Los familiares de tales pacientes suscriben también esa idea: «La atención a los toxicómanos debe hacerse desde el centro de las ciudades. Si las madres tenemos que llevar todos los días a nuestros hijos para que se curen, ¿qué sentido tendría un desplazamiento de 30 kilómetros?» De cualquier manera, éste es un punto en el que aparece una polarización más radical, pues una minoría cualificada (28'7 por ciento) no cree conveniente su tratamiento urbano, porque entiende que al drogadicto hay que alejarlo del entorno donde se ha hecho.

Pero junto a ese pronunciamiento bastante genérico acerca del tipo de zona donde deberían ser atendidos los drogodependientes convenía precisar más. Para tal fin, y teniendo presente que un principio básico en el

esquema de preferencias espaciales del individuo es buscar la proximidad a las actividades deseables o que nos producen bienestar y el alejamiento a las que consideramos perjudiciales, se ensayó una aproximación al problema de medir la distancia a la que se desea tener los CAD con respecto a la vivienda propia.

Resulta bastante complejo averiguar la traducción, en distancias euclidianas por ejemplo, de la separación espacial deseada por la población respecto a tales Centros. La cuestión se complica ante poblaciones con limitaciones por razones de edad, nivel cultural, etc. Por tal motivo, la medición de esas magnitudes de distancia psicológica ha recurrido a procedimientos que, a lo sumo, alcanzan el nivel de medición ordinal. La apreciación y respuesta de los encuestados puede hipotetizarse que es más fiable si se refiere a entes (estímulos) más concretos y sentidos. Por tal motivo se construyó una escala de 5 opciones ordenadas de mayor a menor grado de familiaridad y «topofilia»: en su misma calle, en otra de su barrio, en un barrio próximo, en un barrio distante, fuera de la ciudad. Los encuestados debían indicar dónde ubicarían idealmente un hipotético CAD según sus esquemas de valores en primer lugar. Eliminado éste, debían pronunciarse a continuación por el emplazamiento más deseado entre las restantes opciones, y así sucesivamente hasta llegar al lugar menos deseado. En definitiva se trataba de conseguir una ordenación de 1 (emplazamiento más atrayente) a 5 (lugar más repudiado) según su orden de preferencia.

Nos reduciremos aquí a comentar los datos de las opciones más extremas, puesto que la valoración fue gradual en ambos sentidos, de forma que el 64'4 por ciento del total lo llevarían fuera de la ciudad como primera opción, mientras que un 19'4 por ciento se inclinarían por ubicarlo en su misma calle. La figura 4 da buena idea de la distribución de las preferencias para esas dos localizaciones contrastadas. Se aprecia una contraposición nítida que traduce, indudablemente, utilidades subjetivas de los vecinos.

Realizando un análisis bivariado entre las variables referentes a la deseabilidad del CAD y preferencia de localización fuera de la ciudad, observamos una relación altamente expresiva: la gamma alcanza el valor de 0.52 y la Ji^2 el de 61.36, siendo significativa al nivel del 99.99 por ciento. Del 64'4 por ciento de la población encuestada que prefería fuera de la ciudad, el 57'3 había respondido que era indeseable el emplazamiento

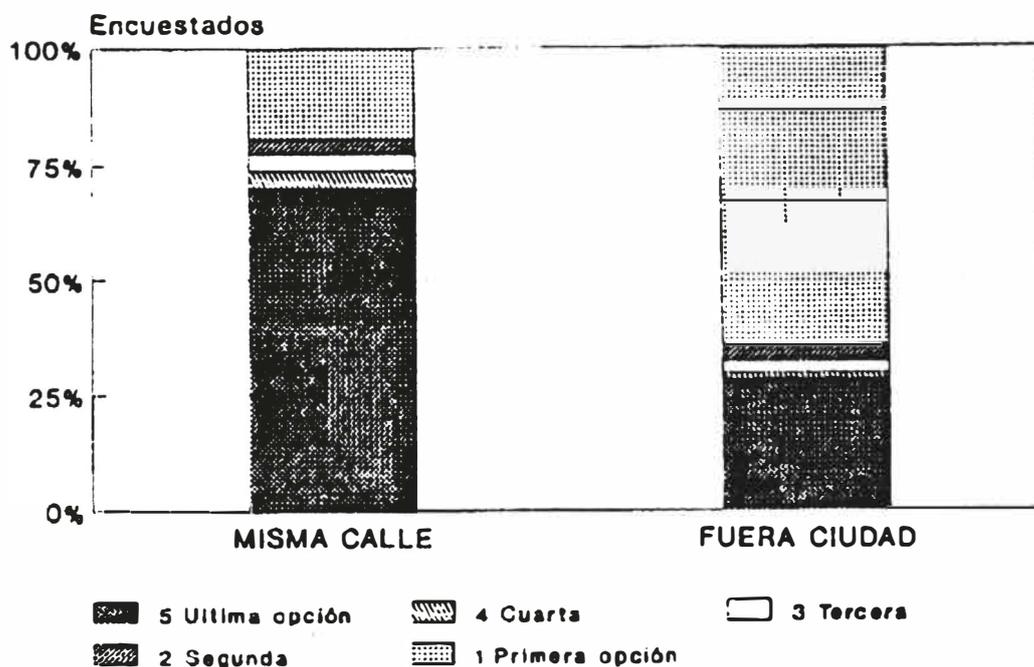


FIGURA 4 — *Preferencias de ubicación deseable para el CAD. La pregunta requería ordenar cinco opciones de localización desde la más deseable a la menos deseable. Se constata cómo la opción de «su misma calle» (columna de la izquierda) es postergada al último lugar por la mayoría, aunque una minoría significativa la elige en primer lugar. La opción «fuera de la ciudad», congruentemente, resulta el reflejo invertido de la anterior*

actual en la calle Puerto Monasterio y sólo el 11'6 por ciento lo consideraba deseable. Además, del 25 por ciento de la población que mostraba indiferencia ante el emplazamiento actual, más de los dos tercios (67.5 por ciento) lo instalaría preferentemente también en las afueras del ámbito urbano.

Las proporciones relativas de las respuestas en el caso del emplazamiento en la propia calle, se invierten prácticamente respecto a las de fuera del núcleo urbano. Un 70 por ciento lo aceptarían ahí como última opción, pero alrededor de una quinta parte de las respuestas abogan por esa implantación como la más deseable. Puede parecer una cifra grande o pequeña, pero tal minoría, con una postura tan polarizada y contraria al resto, merece ser destacada.

Algunas acotaciones explicativas acerca de las preferencias de ubicación de los CAD.—Tras la presentación de los anteriores datos resulta oportuno

analizar ciertos aspectos que pueden aportar explicación a las preferencias expresadas sobre la localización del CAD. Las opiniones no existen en un vacío, sino que se materializan alrededor de informaciones, experiencias, situaciones y atributos personales que constituyen una nebulosa de interrelaciones que conviene explorar, aunque sea, como aquí haremos, de una manera somera. La valoración, repulsión o atracción, que para un individuo tienen estos centros está supeditada a una serie de condicionantes, algunos de los cuales fueron explícitamente investigados en la encuesta. Entre ellos cabe mencionar factores tales como la existencia de familiares o amigos drogodependientes, la utilización que de los servicios ofrecidos por el CAD hagan o hayan hecho, o los incidentes que con personas drogodependientes hayan sufrido.

La combinación de las variables que en la encuesta relacionan los aspectos a los que nos referimos en este apartado nos ofrecen los siguientes resultados: de las personas encuestadas, el 24'3 por ciento tienen familiares o amigos con problemas de droga. Este grupo de población, más directamente en contacto con el drama de la droga, tiende a considerar el CAD de Vallecas desde la indiferencia (27.3 por ciento) a la deseabilidad (40.9 por ciento, según expresa el cuadro II. Por el contrario, el resto, esto

CUADRO II
VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL CAD
SEGÚN VIVENCIAS PERSONALES

EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL CAD	FAMILIAR O AMIGO DROGODEPENDIENTE		Total
	SI	NO	
Tot. indeseable	13.6	23.4	21.0
Algo indeseable	13.6	22.6	20.4
Indiferente	27.3	29.2	28.7
Algo deseable	22.7	9.5	12.7
Totalmente deseable	18.2	9.5	11.6
No sabe	4.5	5.8	5.5
Total	100.0	100.0	100.0

$J_i^2 = 9.72$

Nivel de significación: 91.65%

FUENTE: *Elaboración propia.*

es, aquéllos que no tienen personas afectivamente próximas con dicho problema, se mueven entre los conceptos de indiferente (29.2 por ciento) o de indeseable (46 por ciento).

Del 24'3 por ciento que tienen familiares o amigos con drogodependencias sólo utilizan o han utilizado los servicios de centros especializados en rehabilitación el 40'9 por ciento. Ahora bien, cuando a ese grupo de personas próximas a los afectados se le plantea la cuestión de si localizarían el CAD en su misma calle, se percibe una mayor aceptación que entre los que carecen de tal problema (24.4 por ciento frente a 17.6). En todo caso, tanto en uno como en otro grupo la primera opción sigue siendo fuera de la ciudad (56.1 y 67.2 por ciento, respectivamente). Ello debe ser subrayado ya que uno de los argumentos más utilizados por los partidarios de los CAD en zonas urbanas, radica en el coste económico y sentimental que supone tenerlos lejos.

En la imagen que la población tiene del lugar ideal para la ubicación de un CAD influyen, asimismo, las experiencias negativas con drogodependientes. Así, de las personas que las han sufrido (el 21'2 por ciento de la población encuestada), un 87.9 por ciento los remite a las afueras de la ciudad como primera opción, en tanto que, entre quienes no las han padecido, esa fracción baja hasta 58.4 (cuadro III). Como se ve, el

CUADRO III
LOCALIZACIÓN DESEABLE DEL CAD SEGÚN CONFLICTIVIDAD VIVIDA

UBICACION FUERA DE CIUDAD	INCIDENTES CON DROGODEPENDIENTES		
	SI	NO	Total
PRIMERA OPCION	87.9	58.4	64.6
SEGUNDA OPCION	6.1	3.2	3.8
TERCERA OPCION	0.0	3.2	2.5
CUARTA OPCION	0.0	1.6	1.3
ULTIMA OPCION	6.1	33.6	27.8
Total	100.0	100.0	100.0

$J_i^2 = 12.77$

Nivel de significación: 98.75%

FUENTE: *Elaboración propia.*

rechazo de los centros por parte de las personas que han sufrido algún incidente (atracos en su mayoría) resulta unánime y esa huella parece contaminar a la imagen de los CAD, que, en consecuencia, se consideran un estigma.

Relación entre rasgos personales de la población y emplazamiento del CAD.—Es conocido que las externalidades o impactos que un equipamiento produce en su derredor son percibidos de forma diferencial por la población según sus rasgos personales: sexo, edad, nivel socio-cultural y status económico son factores que modelan el concepto de bienestar individual y, por ende, es presumible que tengan ciertas relaciones con la valoración del CAD. Así pues, se explorarán a continuación algunos de los nexos entre dichos rasgos y el grado de deseabilidad del emplazamiento actual del Centro.

Respecto a la edad, los grupos menores de 40 años tienen una mayor receptividad hacia esa localización; por el contrario, entre los de 60 y 70 años la tolerancia es menor y, aunque en pequeña proporción, los ancianos tienden a sentirla como algo o totalmente indeseable. Respecto al sexo, la relación no es estadísticamente significativa; pese a todo, se insinúa que la indeseabilidad parece asociarse más con los varones que con las mujeres: entre los primeros alcanza a un 46.2 por ciento, entre las mujeres sólo a un 36.7 por ciento (cuadro IV). Quizá una mayor comprensión femenina del drama social de la drogodependencia pueda subyacer a tal diferencia. El nivel de instrucción tampoco da una relación destacada; en todo caso, señalar que se insinúa una valoración más positiva entre los que ostentan estudios universitarios.

Un último factor incidente en la percepción personal es la tenencia de hijos. La reciente jurisprudencia sobre el tema ha utilizado, entre otros, el argumento de la existencia próxima de colegios como un motivo para impedir el funcionamiento de ciertos CAD y puede hipotetizarse una preocupación más extendida entre los cabezas de familia con niños o adolescentes. La tabla de datos (cuadro V) indica al respecto que, si bien no con una fuerza rotunda, una tendencia en tal sentido se perfila: la presencia de hijos en la unidad familiar se asocia a un mayor repudio,⁴ en tanto que entre los cabezas de familia sin hijos se acentúa la valoración positiva del emplazamiento actual del CAD.

⁴ Un 48'3 por ciento lo rechazan, frente a un 34'1 por ciento entre los que no tienen hijos.

LA CONFLICTIVA LOCALIZACIÓN INTRAURBANA...

CUADRO IV
VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL CAD SEGÚN SEXO

EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL CAD	SEXO		Total
	VARON	MUJER	
Tot. indeseable	23.1	18.9	21.0
Algo indeseable	23.1	17.8	20.4
Indiferente	28.6	28.9	28.7
Algo deseable	9.9	15.6	12.7
Totalmente deseable	11.0	12.2	11.6
No sabe	4.4	6.7	5.5
Total	100.0	100.0	100.0

$Ji^2 = 2.66$

Nivel de significación: 24.26%

FUENTE: *Elaboración propia.*

CUADRO V
VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL CAD SEGÚN SITUACIÓN FILIAL

EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL CAD	HIJOS CONVIVIENDO EN LA FAMILIA		Total
	SI	NO	
Tot. indeseable	24.1	16.5	20.2
Algo indeseable	24.1	17.6	20.8
Indiferente	27.6	29.7	28.7
Algo deseable	12.6	13.2	12.9
Totalmente deseable	5.7	17.6	11.8
No sabe	5.7	5.5	5.6
Total	100.0	100.0	100.0

$Ji^2 = 7.57$

Nivel de significación: 81.85%

FUENTE: *Elaboración propia.*

Distancia y percepción de externalidades.—La doctrina de las externalidades espaciales postula que cuando se trata de focos puntuales de emisión, se configuraría un «campo espacial» alrededor de ellos. La forma de difusión de esos efectos podría ser variable según condicionantes varios que habría que desvelar. En los apartados anteriores se ha presentado la apreciación vecinal de una batería de efectos potenciales del CAD sobre el barrio donde se asienta. Sin embargo, nada se ha averiguado aún acerca del presumible campo de externalidades que puede generarse. Con el objetivo de explorar lo concerniente a este punto se ha llevado a cabo un análisis, no exhaustivo, pero sí tratando al menos de responder a una cuestión importante para la evaluación del impacto socio-espacial: ¿Existe alguna relación entre la distancia del domicilio al CAD y los efectos que éste puede producir? Si, como parece lógico, la proximidad o lejanía al equipamiento conlleva un contacto diferencial con los efectos negativos, podría esperarse algún tipo de nexo entre las percepciones individuales (utilidades) y la separación vivencial que mantienen respecto al foco problema. En consecuencia, conviene determinar si tales efectos presentan una variación regular con el alejamiento del Centro.⁵ Antes, sin embargo, es oportuno contar con un dato importante: el grado de información de los vecinos del área de estudio acerca de dicho Centro.

Dos tablas y los índices de asociación anexos permiten establecer convenientemente los hechos (cuadros VI y VII). Clasificando los encuestados en tres intervalos de distancia (en línea recta al CAD), se aprecia una relación lógica: la proporción de ignorantes de la existencia del mismo aumenta con la distancia. Abundando más, entre aquéllos que tenían noticia de su existencia, la desinformación acerca de las actividades desarrolladas en el Centro crecía igualmente con el alejamiento. Aunque esta conclusión parece bastante obvia, conviene tenerla en mente a la hora de interpretar los hallazgos que se presentarán a continuación. Como la Geografía Comportamental y la Psicología Ambiental han reportado, cada individuo posee un «campo de información espacial», dependiente de condicionantes varios (atributos personales, status ocupacional, nivel de renta, etc.). La magnitud y calidad de esa información va a ser, en definiti-

⁵ La problemática expresión cartográfica de los campos de externalidades asociados a este CAD ha sido abordada y resuelta mediante una metodología nueva que puede consultarse en Moreno (1992).

LA CONFLICTIVA LOCALIZACIÓN INTRAURBANA...

**CUADRO VI
CONOCIMIENTO DEL CAD RESPECTO A DISTANCIA AL DOMICILIO**

DISTANCIA (metros)	CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL CAD		
	SI	NO	Total
0-150	40	6	46
150-300	76	26	102
300-450	16	16	32
Total	132	48	180

$J_i^2 = (2 \text{ g.l.})$ 13.347
 Nivel de significación: 99.87%
 Gamma de Goodman-Kruskal 0.499
 FUENTE: *Elaboración propia.*

**CUADRO VII
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL CAD**

DISTANCIA	MUCHA	MEDIANA	POCA	NADA	Total
0-150	4	4	14	18	40
150-300	0	12	16	47	75
300-450	2	1	2	11	16
Total	6	17	32	76	131

$J_i^2 = (6 \text{ g.l.})$ 14.3725
 Nivel de significación: 97.43%
 FUENTE: *Elaboración propia.*

va, la que sirva para hacer cristalizar sus opiniones, reacciones y conductas ante el entorno. Es así sumamente significativo que un cualificado número de encuestados desconozca el CAD y que una abrumadora mayoría ignore qué actividades lleva a cabo. Cabe esperar entonces que ciertas opiniones se apoyen no en un conocimiento profundo de ese servicio social y de sus repercusiones, sino en informaciones (o quizá mejor desinformaciones) mediatizadas: los estereotipos acuñados a través de conversaciones, medios de comunicación, actividades de grupos vecinales (manifestaciones, pintadas, etc.) pueden estar en la base de las actitudes ciudadanas.

Cuando se examinan las respuestas obtenidas en materia de percepción de los efectos negativos del CAD sobre el barrio, los resultados son bastante elocuentes. El cruce de la variable distancia lineal al CAD con las opiniones individuales acerca del aumento o disminución de posibles externalidades no muestra relaciones significativas más que ocasionalmente. Utilizando los mismos umbrales de distancia que para los cuadros anteriores, el grueso de los coeficientes J_i^2 no alcanzan el nivel de significación del 5 por ciento (cuadro VIII). Tan sólo en lo concerniente a la atracción de gente indeseable parece perfilarse cierta convergencia entre los encuestados (cuadro IX); y curiosamente de la tabla se deduce que los que piensan que no influye se sitúan cerca (intervalo de 0-150 m.), en tanto que los que opinan que atrae se ubican en cierto exceso a algo más de distancia (intervalo de 150-300 m.), tal como refleja la comparación entre frecuencias empíricas y teóricas.

Y si la mayor o menor proximidad al CAD no se traduce en unas percepciones claras de esa gama de posibles efectos negativos, ello lleva a presumir, por el momento, dos hipótesis explicativas: la primera, y quizá la más verosímil, sería que realmente las características actuales del equipamiento no producen tales impactos; la segunda podría apelar a un desconocimiento vecinal de ellos, lo que llevaría a pensar que su posicionamiento respecto al CAD muy poco tendría que ver con las externalidades (reales o supuestas) asociadas al mismo y mucho con los prejuicios y estereotipos.

Otras actitudes vecinales insinúan relaciones bastante expresivas y aparentemente contradictorias. Los que apoyan el tratamiento en las zonas de residencia de los drogodependientes abundan proporcionalmente más en la banda próxima al CAD, y los contrarios, en las franjas más lejanas ¿Un síntoma de que no han percibido efectos nocivos tangibles?

LA CONFLICTIVA LOCALIZACIÓN INTRAURBANA...

**CUADRO VIII
RELACIÓN ENTRE DISTANCIA AL CAD Y EXTERNALIDADES**

POSIBLES EFECTOS EXTERNOS	Ji cuadr.	Nivel de sign. (*)
Valor de pisos y locales	8.68	9.19
Seguridad de personas e inmuebles	1.79	0.93
Delincuencia en el barrio	10.26	0.11
Calidad del barrio	9.14	0.17
Clientela de los negocios	5.47	0.49
Satisfacción con el barrio	8.62	0.20
Atracción de gente indeseable	14.72	0.02

(*) Para ser significativos al nivel confianza del 95 por ciento, estos valores deben ser inferiores a 0.05.

FUENTE: *Elaboración propia.*

**CUADRO IX
RELACIÓN ENTRE DISTANCIA DEL DOMICILIO AL CAD
Y PERCEPCIÓN DE GENTE INDESEABLE**

DISTANCIA (Metros)	EFECTO DEL CAD SOBRE GENTE INDESEABLE				Total	
	Aleja	No influye	Atrae	No sabe		
0-150	Fe	3	26	11	6	46
	Ft	2	19	16	10	46
150-300	Fe	2	36	43	21	102
	Ft	4	42	35	22	102
300-450	Fe	2	12	7	11	32
	Ft	1	13	11	7	32
Total	Fe	7	74	61	38	180
	Ft	7	74	61	38	180

Fe: Frecuencias empíricas.

Ft. Frecuencias teóricas en el supuesto de independencia

FUENTE: *Elaboración propia.*

¿Un reflejo de una creencia de que los drogodependientes no son del barrio y que, por ende, tales centros irían a otras zonas?

Parecidas reflexiones suscita la valoración del emplazamiento actual del CAD que se hace según distancias al mismo. El coeficiente J_i^2 (21.71) es ahora significativo al nivel del 98.34 por ciento. Los que lo consideran deseable abundan más a cierta distancia (150-300 metros) y los indiferentes en la franja más próxima (menos de 150 metros). Quienes la rechazan, por su parte, no muestran una tendencia clara al respecto (cuadro X).

CUADRO X
RELACIÓN ENTRE DISTANCIA DEL DOMICILIO AL CAD
Y VALORACIÓN DE SU EMPLAZAMIENTO

DISTANCIA (Metros)	EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL CAD						Total	
	Tot. de- seable	Algo de- seable	Indife- ferente	Algo in- deseable	Tot. in- deseable	No sabe		
0-150	Fe	5	9	17	1	8	6	46
	Ft	9	9	13	6	5	3	46
150-300	Fe	25	23	27	17	9	1	102
	Ft	21	21	29	13	12	6	102
300-450	Fe	7	5	8	5	4	3	32
	Ft	7	7	9	4	4	2	32
Total	Fe	37	37	52	23	21	10	180
	Ft	37	37	52	23	21	10	180

Fe: Frecuencias empíricas.

Ft. Frecuencias teóricas en el supuesto de independencia

FUENTE: *Elaboración propia.*

Conclusiones

Dos categorías de conclusiones pueden ser establecidas a partir de los datos del estudio. Por un lado, las atinentes al caso analizado y, por otro, las de carácter más general sobre este tipo de equipamientos.

En lo concerniente al primer grupo, se evidencia que las posturas actuales hacia el CAD y los conflictos no han evolucionado mucho respecto

a los que en el momento de su apertura alcanzaron notorio eco en los medios de comunicación. Aunque hay resultados muy inequívocos, como el que se refiere a la preferencia de ubicación fuera de la ciudad (un 70 por ciento de la población encuestada), esos deseos subjetivos no parecen sustentarse en unas externalidades igualmente claras y contundentes. En los posibles efectos externos investigados la opinión más extendida es que el CAD no influye, si bien en ciertas facetas un cúmulo significativo de encuestados entiende que acarrea un empeoramiento. La misma conclusión se desprende de los datos obtenidos en una pregunta abierta acerca de otros posibles efectos no mencionados en la entrevista: que el CAD no ha ocasionado grandes trastornos o conflictos ni al entorno ni a su población, aunque haya generado, como puede hacerlo cualquier equipamiento, opiniones encontradas. Es, sobre todo, cuando se abordan las cuestiones más abstractas o globales acerca de la satisfacción, preferencias de localización, valoración del sitio actual, etc., cuando surgen con mayor claridad las connotaciones peyorativas que se asocian a los CAD.

A partir de este caso concreto puede extraerse de forma sucinta un segundo grupo de ideas básicas relativas a la ubicación de equipamientos controvertidos en medio urbano. Parece indudable que un cierto número de necesidades sociales requieren la creación de dotaciones accesibles a los usuarios potenciales. No es lógico pensar que, al igual que sucede con cualquier otro servicio, la demanda de los CAD posea un cierto grado de elasticidad respecto a los costes de desplazamiento, por lo que, si terapéuticamente se estima que el tratamiento de drogodependientes debe realizarse en ciertos casos no en internados, sino bajo la forma de consultorios o centros de día, esa accesibilidad espacial debe constituir una consideración importante en su localización. La opinión de los vecinos, expresada en la encuesta, converge en ese sentido, ya que una mayoría cualificada entiende que el tratamiento debe realizarse en las propias zonas donde residen los drogodependientes.

Parece evidente la conveniencia de tales centros por cuanto, además de atender a un colectivo con un padecimiento específico, la curación tendría efectos positivos en aspectos tales como la seguridad, integración social, recuperación para la actividad económica, estabilidad familiar, disminución de ciertas enfermedades (SIDA, por ejemplo), etc., hechos éstos que aquí no se han considerado, pero que indudablemente constituyen otros tantos beneficios.

Pero, al mismo tiempo, un dato también evidente es la controversia social que generan estos establecimientos. Que los CAD produzcan unos efectos negativos categóricos sobre el entorno no ha podido ser demostrado en esta investigación. Los posicionamientos individuales muestran, salvo alguna excepción, una mayoría de respuestas en torno a la idea de que no afectan, con minorías más o menos cuantiosas que *sienten* unos impactos negativos.

La práctica ausencia de una tendencia espacial de esos efectos sentidos (reflejo de una mezcla bastante acusada) y el desconocimiento de la existencia del CAD por una parte de la población extiende una sombra de duda más que razonable acerca de la realidad de esos efectos negativos. Lo que no puede negarse en absoluto es que, al margen de ello, el vecindario se inclina por un alejamiento de tales equipamientos de su zona de residencia. Las razones de tal preferencia sólo indirectamente han sido objeto de atención aquí, pero en cualquier caso esos servicios cuando menos desagradan en la vecindad, posiblemente por su connotación peyorativa y los presuntos efectos negativos que podrían acarrear. Sea por unas razones sólidas o por estereotipos y prejuicios, lo cierto es que la utilidad o satisfacción del grueso de los encuestados crece cuando tienen tales centros lejos de su zona de vivienda. En este sentido, sí que puede hablarse de unas externalidades negativas *sentidas* por un cualificado número de cabezas de familia.

Una decisión de localización más fundada debería conjugar, por tanto, las exigencias de accesibilidad espacial a los usuarios y la repelencia social que acompaña a instalaciones como éstas. Aunque no sea una receta fácil, parece que los esfuerzos que se realicen por encontrar emplazamientos tales que combinen una cierta proximidad a las zonas de vivienda de la demanda potencial y una cierta marginalidad respecto a determinados usos del suelo (residenciales, escolares o comerciales, por ejemplo), supondría reducir el conflicto y las desutilidades esperables y que llegan a involucrar a las instancias judiciales para dirimir la confrontación. En el diseño urbanístico pueden encontrarse fórmulas de compromiso: ciertas barreras (funcionales o visuales) erigidas *ex profeso*, localizaciones de borde, aislamientos provocados por infraestructuras viarias, etc., pueden acrecentar la «distancia psicológica» de los vecinos respecto a un emplazamiento específico y, por tanto, reducir el malestar. No está de más recordar que el recurso a medidas de compensación (por ejemplo, provisión de

equipamientos deseables) puede ser una vía fructífera de paliar la oposición, como otros casos han puesto de manifiesto.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVIRA, F. y COMAS, D. (1990): *El consumo de drogas en el municipio de Madrid*. Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
- BAILE, J. (1981): «Teaching welfare issues in urban geography», en Walford, R. (ed.): *Signposts for geography teaching*. Londres, Longman, pp. 51-63.
- BENNETT, R. J. (1980): *The geography of public finance*. London, Methuen.
- CORNES, R. y SANDLER, T. (1986): *The theory of externalities, public goods and club goods*. Cambridge University Press.
- K. R. (1973): *Conflict, power and politics in the city. A geographic view*. N. York, McGraw Hill.
- COX, K. R. (1978, ed.): *Urbanization and conflict in market societies*. Londres, Methuen.
- COX, K. R. y JOHNSTON, R. J. (1978): *Conflict, politics and the urban scene*. Londres, Longman.
- CHURCH, R. L. y BELL, T. L. (1981): «Incorporating preferences in location-allocation models», *Geographical Perspectives*, 48, pp. 22-34.
- DEAR, M. J. y LONG, J. (1978): «Community strategies in locational conflict», en Cox, K. (ed.): *Urbanization and conflict in market societies*. Londres, Methuen, pp. 113-127.
- DEAR, M.; TAYLOR, S. M. y HALL, G. B. (1980): «External effects of mental health facilities», *Annals of the Association of American Geographers*, 70, 3. pp. 342-352.
- DEAR, M. J. and TAYLOR, S. M. (1982): *Not on our street. Community attitudes to mental health care*. London, Pion.
- ERKUT, E. y NEUMAN, S. (1989): «Analytical models for locating undesirable facilities», *European Journal of Operational Research*, 40, pp. 275-291.
- FINSTERBUCH, K. (1985): «State of art in social impact assessment», *Environment and Behavior*, 17, pp. 193-221.
- FINSTERBUCH, K. y WOLF, C. P. (Ed.) (1981): *Methodology of social impact assessment*. Stroudsburg (Pennsylvania), Hutchinson and Ross.
- HARVEY, D. (1973): *Social justice and the city*. Londres, E. Arnold (trad. esp.: *Urbanismo y desigualdad social*. Madrid, Siglo XXI, 1977).
- JANELLE, D. G. y MILLWARD, H. A. (1976): «Locational conflict patterns and urban ecological structure», *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie*, 67, 2, pp. 102-113.
- JOHANSSON, P. O. (1987): *The economic theory and measurement of environmental benefits*. Cambridge, Cambridge University Press.
- KANEMOTO, Y. (1980): *The theory of urban externalities*. Amsterdam, North Holland.
- LEAL, J. Y RÍOS, J. (1989): *Los espacios colectivos en la ciudad. Planificación de usos y servicios públicos*. Madrid, Instituto del Territorio y el Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- LIN, S. A. Y. (1976, ed.): *Theory and measurement of economic externalities*. Nueva York, Academic Press.
- LINEBERRY, R. (1977): *Equality and urban policy. The distribution of municipal public services*. Beverly Hills, Sage.
- MEYER, D. (1986): *Services publics et redistribution du revenu*. Neuchâtel, EDES.

- MILLER, C. (1987): «Efficiency, equity and pollution: the case of radioactive waste», *Environment and Planning A*, 19, pp. 913-924.
- MISHAN, E. J. (1976): «La literatura de posguerra sobre externalidades: Un ensayo interpretativo», *Económicas y Empresariales en la UNED*, 2, pp. 207-230.
- MORENO, A. y ESCOLANO, S. (1992): *El comercio y los servicios para la producción y el consumo*. Madrid, Síntesis.
- MUMPHREY, A. J. Jr., SELEY, J. E. y WOLPERT, J. (1971): «A decision model for locating controversial facilities», *Journal of the American Institute of Planners*, 37, 6, pp. 397-402.
- ORLOFF, C. S. (1977): «A theoretical model of net accessibility in public facility location», *Geographical Analysis*, IX, pp. 244-256.
- PACIONE, M. (1982): «The use of objective and subjective measures of life quality in human geography», *Progress in Human Geography*, 6, 4, pp. 495-514.
- PAPAGEORGIU, G. J. (1978): «Spatial externalities I: theory. II: Applications», *Annals of the Association of American Geographers*, 68, 4, pp. 465-492.
- PAPAGEORGIU, G. J. (1982): «Externality diffusion», *Sistemi Urbani*, 1/2, pp. 17-39.
- PATTON, G. V. y SAWICKI, D. S. (1986): *Basic methods of policy analysis and planning*. Englewood cliffs, Prentice Hall.
- QUADE, E. S. (1975): *Analysis for public decisions*. Elsevier (trad. esp. de la 2.^a ed. 1982: *Análisis de formación de decisiones políticas*. Madrid, Inst. de Estudios Fiscales, 1989).
- PINCH, S. (1985): *Cities and services. The geography of collective consumption*. London, Routledge and Kegan Paul.
- RATICK, S. J. y WHITE, A. L. (1988): «A risk sharing modelo for locating noxious facilities», *Environment and Planning B*, 15, pp. 165-179.
- REYNOLDS, D. R. and HONEY, R. (1978): «Conflict in the location of salutary facilities» in K. R. Cox (ed.): *Urbanization processes and conflict in market societies*. Maroufa Press, p. 144-160.
- SAUBER, S. R. (1983): *The human services delivery system: mental health, criminal, justice, social welfare, education and health services*. New York, Columbia Univ. Press.
- SMITH, D. M. (1980): *Geografía humana. Un enfoque del bienestar*. Barcelona, Oikos-tau.
- SUBIRATS, J. (1989): *Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración*. Madrid, INAP.
- WERCZBERGER, E. y BERECHMAN, J. (1988): «Incorporating neighborhood effects into spatial allocation models», *Environment and Planning A*, 20, pp. 595-607.

RESUMEN.—*La conflictiva localización intraurbana de los centros de atención a drogodependientes.* Un cierto número de equipamientos junto con los beneficios asociados con su uso, generan rechazo o malestar a la población o actividades circundantes, hecho que a menudo se menosprecia en el proceso de toma de decisiones. En aras de proveer una apreciación más fundada de los a veces serios conflictos que se generan, en este trabajo se examina, desde unas miras descriptivas y explicativas, el caso de las externalidades asociadas a un centro de atención a drogodependientes de Madrid. A partir de una encuesta a vecinos cabezas de familia se evalúan y determinan los supuestos efectos ocasionados.

PALABRA CLAVE.—Equipamientos sociales. Conflictos de localización. Percepción ambiental.

LA CONFLICTIVA LOCALIZACIÓN INTRAURBANA...

ABSTRACT.—*The conflicting intraurban location of drug addict care centres. Some social facilities produce both benefits linked to its use and rejection or disbenefits to surrounding people or activities. This fact is frequently underestimated in the decision making process. In order to provide a more grounded appraisal of the serious conflicts emerging sometimes, this paper studies, from a descriptive and explanatory basis, the case of externalities associated to a drug addicts treatment centre in Madrid. From a survey conducted among neighbour householders the supposed effects are measured and evaluated.*

KEY WORDS.—Social facilities. Locational conflicts. Environmental perception.

RÉSUMÉ.—*La tendue localisation intraurbaine des centres pour le soin des consommateurs de drogue. Quelques des équipements provoquent au même temps des bénéfices liés à l'utilisation et du refus et de la malaise chez la population et les activités des environs. Ce fait est assez frequemment méprisé dans le processus de prise des décisions. Dans le but d'offrir une meilleur appréciation des sérieux conflits que parfois apparaissent, dans cet article on examine, du point de vue descriptive et explicative, le cas des externalités liées à un centre pour le soin des consommateurs de drogue à Madrid. A partir d'une enquête réalisée chez les chefs de famille les affects conjecturés sont déterminés et évalués.*

MORS CLÉ.—Equipements sociales. Conflicts locationels. Perception de l'environnement.